

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D. C.

Bogotá D. C., 18 de agosto de 2020

Referencia: MEDIDA DE PROTECCIÓN

Radicación: 11001-31-10-009-2020-00176

Procedentes de la Comisaría Diecinueve de Familia –Ciudad Bolívar 1 de esta ciudad, han llegado las presentes diligencias para que se surta el grado de consulta en relación con el acto administrativo allí proferido el 19 de febrero de 2020, a través del cual, entre otras decisiones, se declaró probado el incumplimiento a la medida de protección por parte del señor RAFAEL ANTONIO CARO REINA y el señor JHON ALEXANDER CARO ARGUELLO y se les sancionó con multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente.

ANTECEDENTES:

El señor **RAFAEL ANTONIO CARO** presentó solicitud de medida de protección contra el señor **JOHN ALEXANDER CARO** la cual culminó con la resolución de fecha 12 de marzo de 2007 mediante la cual, entre otras decisiones, impuso medida de protección definitiva en contra del señor **JOHN ALEXANDER CARO** a favor de **RAFAEL ANTONIO CARO** y otra en contra del señor **RAFAEL ANTONIO CARO** a favor de **JOHN ALEXANDER CARO**.

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación, puso en conocimiento el incumplimiento de la medida de protección que le fuera impuesta a los señores **JOHN ALEXANDER CARO** y **RAFAEL ANTONIO CARO**, indicando que el día 26 de agosto de 2019 se agredieron físicamente.

La Comisaría adelantó el correspondiente incidente y le dio el trámite de ley.

Llegado el día y la hora se celebró la audiencia y la Comisaría competente en resolución que aquí se consulta declaró entre otras cosas, probado el

incumplimiento por parte de los señores **JOHN ALEXANDER CARO** y **RAFAEL ANTONIO CARO** a la medida de protección y lo sanciono con multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y le advirtió que el incumplimiento a la sanción impuesta se convertirá en arresto en razón a razón de 3 días por cada salario mínimo.

Expuesto lo anterior, el despacho entra a resolver este asunto, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Mediante la Ley 294 de 1996, reformada por la Ley 575 de 2000, se desarrolló el artículo 42 de la Constitución Nacional, previendo en su art. 4º, *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de un daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil o Promiscuo Municipal, una medida de Protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que este se realice cuando fuere inminente”*.

Es así como en contra de la Resolución de incumplimiento de la medida de protección es procedente su consulta, con el fin de determinar si debe revocarse o no la decisión (artículo 12 D.R. 652 de 2001).

Es importante resaltar lo consagrado por la Constitución Política en su artículo 42-5 que reza: *“Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley”*.

En desarrollo de las normas referidas, se expidieron las leyes 294 de 1996 y 575 del año 2000, encaminadas a *“garantizar los derechos de los miembros más débiles de la sociedad (menores, ancianos y mujeres), erradicar la violencia de la familia; es objetivo en el cual está comprometido el interés general, por ser la familia la institución básica y núcleo fundamental de la sociedad, y por ser un espacio básico para la consolidación de la paz”*. Sentencia C-285 del 5 de junio de 1997, Corte Constitucional.

La H. Corte Constitucional en sentencia T 027/17 M.P. AQUILES ARRIETA GÓMEZ señaló: “La Corte Constitucional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, ha reconocido en su jurisprudencia que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que presentan una “(...) situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familiar, a la educación y al trabajo”. En este sentido, y en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar...”

El art 2º de la ley 1257 de 2008 define la violencia contra la mujer:

“Artículo 2º. Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.

Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.”

Por su parte, sostuvo la H. Corte Constitucional en sentencia de tutela No 967-14:

“¿Qué es violencia doméstica o intrafamiliar?

32. La violencia doméstica o intrafamiliar es aquella que se propicia por el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por acción u omisión de cualquier miembro de la familia.

33. A partir de las reivindicaciones logradas en las últimas décadas por los distintos movimientos feministas^[1], la visibilización del fenómeno de la violencia intrafamiliar, en especial cuando es física o sexual, se ha abierto en algunos espacios, en los cuales, inclusive, se han posicionado algunos comportamientos como constitutivos de torturas y tratos crueles contra la mujer al interior del hogar. Así, por ejemplo, esta Corte, en **sentencia C-408 de 1996**^[2], reconoció que:

“las mujeres están también sometidas a una violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (CP art. 13) sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constitución (CP arts. 12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos.

Así, según la Relatora Especial de Naciones Unidas de Violencia contra la Mujer (sic), ‘la violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’^[3].

Sobre la violencia, se estableció su carácter multifacético y se registró de manera más visible la **violencia física**, como aquella que atenta contra la integridad de las personas a partir de actos “como empujones, gritos, cachetadas, arrojar objetos al otro, etc., hasta la violencia que puede eliminar al otro y acabar con el derecho a la vida”.

¿Qué es violencia psicológica?

36. La violencia psicológica se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja de autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del individuo sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo^[4].

37. Al estudiar este tema, la Organización Mundial de la Salud presentó el precitado Informe titulado “Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer

y la violencia doméstica contra la mujer (2005)"^[5]. De los resultados de las investigaciones se destacan las conclusiones referentes al **maltrato psíquico** infligido por la pareja a la mujer, pues se establece que el mismo es sistemático y en la mayoría de los casos es más devastador que la propia violencia física.

De otra parte, conforme al art. 7° de la Ley inicialmente aludida, esto es, la 294 de 1996, en caso incumplimiento **por primera vez** de la medida de protección, es viable la sanción pecuniaria entre 2 y 10 salarios mínimos legales, y en caso de reincidencia dentro de los 2 años la sanción será arresto entre 30 y 45 días.

- Obran como pruebas del líbelo:
- Descargos rendidos por el incidentado e incidentante **RAFAEL ANTONIO CARO** manifestó que *"yo le pregunte por la camisa a mi hijo y él me contesto de muy mala manera que él no se la había robado, cuan de pronto vi que se me lanzo a pegarme y yo cogí una varilla y le pegue en el brazo y él cogió un ladrillo y me lo tiro en la cabeza, me pegaba en el pecho, en la espalda."*
- Descargos rendidos por el incidentado e incidentante **JOHN ALEXANDER CARO** manifestó que *"mi padre estaba en estado de embriaguez y decía todo el tiempo que nos iba a matar, en una de esas mi mamá se metió y mi padre le lanzo un varillazo y fue cuando me metí a defenderla cuando me di cuenta"*
- Dictamen médico Legal practicado al señor **JOHN ALEXANDER CARO**; El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló el 26 de agosto de 2019 que el examinado presentaba "edema y dolor a nivel mandibular izquierda, codo izquierdo con herida... Incapacidad médico legal PROVISIONAL CUARENTA (40) DÍAS..."
- Dictamen médico Legal practicado al señor **RAFAEL ANTONIO CARO**; El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló el 26 de agosto de 2019 que el examinado presentaba "herida región parietal izquierda aproximadamente 10 cm... Incapacidad médico legal PROVISIONAL DOCE (12) DÍAS..."

Por ser estos hechos, de maltrato verbal, físico y psicológico realizados en contra de los señores **JOHN ALEXANDER CARO y RAFAEL ANTONIO CARO**, graves para la sana convivencia de la familia y del buen trato entre los miembros de la misma, atendiendo a los criterios de gravedad de la conducta los hechos y la necesidad de prevenir nuevos comportamientos como el aquí descrito, indefectiblemente se abre paso el correctivo impuesto por el a-quo contra los señores **JOHN ALEXANDER CARO y RAFAEL ANTONIO CARO**, ante la reiteración de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar contra la ofendida.

Por lo expuesto anteriormente, considera este despacho la existencia de elementos suficientes para confirmar la medida de protección tomada y la sanción impuesta a

los señores **JOHN ALEXANDER CARO y RAFAEL ANTONIO CARO**, razón por la cual se confirmará la providencia objeto de consulta.

Por lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión objeto de consulta de fecha 19 de febrero de 2020.

SEGUNDO: Devuélvase mediante **OFICIO** la actuación a la oficina de origen, dejando las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE

JUEZ,



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA DE ORALIDAD

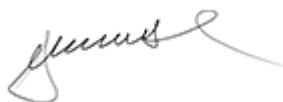
BOGOTA D.C.

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

SECRETARIA

Bogotá D.C19-08-2020 (artículo 295 del C.G.P.)

El auto anterior queda notificado a las partes por anotación en el ESTADO
54



Secretario: _____

TOMAS OLAYA GONZÁLEZ

^[1] Feminismos liberales, radicales, culturales, socialistas, críticos, latinoamericanos, entre otros.

^[2] M. P. Alejandro Martínez Caballero.

^[3] "Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Documento E/CN.4/1996/53 Párrafo No 48."

^[4] Según el artículo 3° de la Ley 2157 de 2008, el daño psicológico es el *"proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal."*

^[5] Dentro del cual se incluyen varias investigaciones realizadas en algunos países seleccionados como Brasil, Perú, Montenegro, República Unida de Tanzania y Japón, entre otros.